

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., dos (02) de julio de dos mil diecinueve (2019).

Referencia 110013335 009 2019 00248 00
Convocantes: Constain Morales Bueno
Convocado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
(Aprueba conciliación)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 640 de 2001 y 12 del Decreto 1716 de 2009, el Despacho procede a resolver sobre la aprobación o no del acuerdo conciliatorio celebrado el 07 de junio de 2019, entre el convocante **Constain Morales Bueno** y la convocada **CASUR** ante la Procuraduría 136 Judicial II Para Asuntos Administrativos.

I. ANTECEDENTES

1. De la solicitud de conciliación

1.1. El señor **Constain Morales Bueno** a través de apoderado judicial, el 08 de abril de 2019 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 136 Judicial II para Asuntos Administrativos, en la que convocó a **CASUR** a efectos de conciliar sobre el reajuste de su asignación de retiro, de conformidad con el IPC certificado por el DANE para el año 1997 (fls. 19 - 22).

1.2. La causa fáctica se sintetiza así:

1.2.1. El Agente @ **Constain Morales Bueno** prestó sus servicios a la Policía Nacional, por lo que mediante la Resolución nro. 5512 del 21 de septiembre de 1982 le reconoció y ordenó pagar la asignación de retiro (fl. 7).

1.2.2. En cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 04 de diciembre de 2009 (fls. 11 - 16), **CASUR**, mediante Resolución nro. 5820 del 15 de agosto de 2012,

incrementó la asignación de retiro del convocante con el IPC, para los años 1999 y 2002 (fls. 17 – 18).

1.2.3. El 20 de marzo de 2019 con radicado R-00001-201913232-CASUR IdControl: 412365, el convocante le solicitó a CASUR el reajuste de la asignación de retiro conforme al IPC (fls. 3 - 4). La convocada mediante Oficio E-01523-201906858 CASUR Id: 415387 del 26 de marzo de 2019 denegó su solicitud (fl. 5).

2. Del acuerdo conciliatorio

2.1. La apoderada de la entidad convocada, en el trámite de la conciliación extrajudicial aportó certificación de Comité de Conciliación del 31 de mayo de 2019, que señala lo siguiente (fls. 33 - 34):

<<El convocante Sr. AG @ CONSTAIN MORALES BUENO, identificado con la cédula de ciudadanía 19.129.691, cuya fecha de retiro fue el 07 de OCTUBRE de 1981, de acuerdo con la Resolución que reconoció y ordenó el pago de la A.M.R. N° 5512 de 1982, pretende el reconocimiento y pago indexado de IPC para el año 1997 ya que los otros años ya fueron objeto de debate judicial.

La asignación mensual de retiro se reconoció en cuantía equivalente al 54% del sueldo básico y las partidas legalmente computables.

Colorario con lo anterior, en el presente evento si es procedente presentar propuesta de conciliación de acuerdo con las políticas institucionales para la prevención del daño antijurídico establecidas por el Comité de Conciliación de CASUR, mediante el Acta N° 1, toda vez que se dan los presupuestos facticos y jurídicos para reajustar la asignación mensual de retiro, pero únicamente para el año 1997 ya que se cuenta con el antecedente de la sentencia del 04 de Diciembre de 2009 emanada por el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 2008-0258, en virtud de la cual se ordenó el pago por este concepto (IPC) para los años 1999, 2002 y 2004, de tal manera que sobre estos años ya operó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada material y formal,. Máxime cuando la entidad convocada dio cabal cumplimiento a dicho fallo judicial mediante la Resolución 5820 del 15 de agosto de 2012, los cuales se allegaron a la Procuraduría de Conocimiento por el convocante.

Teniendo en cuenta la prescripción de las mesadas de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 1213 de 1990, se le pagará el retroactivo a partir del 20 de marzo de 2015 considerando que el convocante solicitó formalmente a CASUR este reajuste el día 20 de marzo de 2019.

(...)

Así las cosas, al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para el presente caso, si le asiste

ánimo conciliatorio, únicamente para el año 1997 por las razones antes expuestas.

En los anteriores términos al comité de conciliación y defensa jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, determina que para el presente asunto **si le asiste ánimo conciliatorio>>**.

2.2. De conformidad con la decisión del Comité, la entidad convocada realizó la liquidación de los emolumentos dejados de percibir por el convocante, en el año 1997, así (fls. 35 - 41):

VALOR DE CAPITAL INDEXADO	\$1.599.993.00
VALOR CAPITAL 100%	\$1.480.131.00
VALOR INDEXACIÓN	\$119.862.00
VALOR INDEXACIÓN POR EL (75%)	\$89.897.00
VALOR CAPITAL MÁS (75%) DE LA INDEXACIÓN	\$1.570.028.00
MENOS DESCUENTO CASUR	-\$60.196.00
MENOS DESCUENTO SANIDAD	-\$55.309.00
VALOR A PAGAR	\$1.454.523.00

INCREMENTO MENSUAL DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO	\$27.190.00
---	-------------

2.3. Así mismo, en la audiencia celebrada el 07 de junio de 2019, la convocada ratificó lo expuesto por el Comité de Conciliación. En acto seguido, la parte convocante acepta la propuesta conciliatoria, por lo que el Ministerio Público en sus consideraciones justificó el acuerdo de conformidad con la certificación expedida por el Comité de Conciliación (fls. 42 - 43).

3. Las partes aportaron como **pruebas** al trámite conciliatorio las siguientes:

- Petición R-00001-201913232-CASUR IdControl 412365 del 20 de marzo de 2019 (fls. 3 - 4);
- Oficio E-01523-201906858-CASUR Id: 415387 del 26 de marzo de 2019 (fl. 5);
- Hoja de servicios nro. 1778 del 13 de noviembre de 1981 (fl. 6);
- Resolución nro. 5512 del 21 de septiembre de 1982 (fl. 7);
- Liquidaciones incremento salarial (fls. 8 - 10, 35 - 41);
- Sentencia del 04 de diciembre de 2009 proferida por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. (fls. 11 - 16);
- Resolución de cumplimiento fallo judicial nro. 5820 del 15 de agosto de 2012 (fls. 17 - 18);
- Solicitud de conciliación extrajudicial (fls. 19 - 22);
- Remisiones traslado solicitud de conciliación prejudicial (fls. 23 - 24);
- Certificación ánimo conciliatorio del 31 de mayo de 2019 expedida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de CASUR (fls. 33 - 34);

- Acta de conciliación extrajudicial del 07 de junio de 2019 (fs. 42 - 43).

II. CONSIDERACIONES

4. Competencia

4.1. La conciliación extrajudicial es un mecanismo de solución de conflictos de carácter particular y de contenido patrimonial, el cual, conforme a lo establecido en las leyes 23 de 1991 y 640 de 2001, procede también en asuntos que podrían ventilarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

4.2. La Ley 640 de 2001, que regula lo correspondiente a la solución alternativa de conflictos, estipuló en su artículo 3º, las clases de conciliación existentes, dividiéndolas en judiciales y extrajudiciales, esta última haciendo referencia a la conciliación prejudicial ya contemplada por la Ley 23 de 1991.

4.3. En tal virtud, conforme a la normatividad vigente, la conciliación es una manifestación unívoca de voluntad de las partes, en este caso prejudicial, ante un conflicto originado por actividad administrativa o en ejercicio de aquella, con participación del Procurador Judicial, la que sólo surte efectos jurídicos, con la ejecutoria de la decisión jurisdiccional que la aprueba.

4.4. Las pretensiones no superan los 50 SMLMV, por lo que su conocimiento recae en los juzgados (CPACA, art. 152.2.).

5. Problema Jurídico

El Despacho debe resolver si se aprueba un acuerdo conciliatorio relativo al reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC únicamente para el año 1997 y la indexación.

6. Cuestión previa

6.1. En aras de verificar que el acuerdo sometido a aprobación judicial, se ajusta a la ley, y no es lesivo para el patrimonio público, de conformidad con lo señalado en los artículos 25, 26 y 37 de la Ley 640 de 2001, se estima pertinente hacer una breve alusión al derecho concertado.

6.2. Precisado lo anterior, el Despacho procede a explicar la evolución en tres etapas de lo sucedido con el IPC, para la prestación que se concilia:

6.2.1. Primera etapa.- Consagró el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 una fórmula para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, cualquiera fuere el régimen de ellas. Sin embargo, la misma ley en su artículo 279 excluyó de los beneficios de dicho estatuto de seguridad social integral al personal de la Fuerza Pública, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la mencionada Ley.

Por su parte el artículo 142 *ejusdem* dispuso el pago de mesada adicional, incluidos <<los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional>>.

6.2.2. Segunda etapa.- Posteriormente, el artículo 1º de la Ley 238 de 1995, adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que:

<<Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados>>.

De manera que, con la Ley 238 de 1995 se les reconocen aquellos beneficios y derechos, de indexación –art. 14- y mesada adicional en junio –art. 142-, a los miembros de la Fuerza Pública.

6.2.3. Tercera etapa.- Como un auténtico retorno al sistema que anteriormente se ha denominado de la primera etapa, es el que se produce con la expedición del Decreto 4433 de 2004, el cual volvió a consagrar el incremento de las asignaciones de retiro aplicando el principio de oscilación, teniendo en cuenta la variación en las asignaciones de los oficiales y suboficiales en actividad y en adelante prohíbe acogerse a normas que regulen ajustes para la Administración Pública, a menos que así lo regule expresamente la ley.

Profusos han sido los pronunciamientos del Consejo de Estado en torno al tema, como la sentencia proferida con ponencia del consejero William Hernández Gómez, Expediente 73001-23-33-000-2013-00382-01 (3181-14), sentencia de 5 de abril de 2017, en la cual recordó lo expuesto en sentencia del 4 de marzo de 2010, con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero, que al respecto señaló:

<<El reajuste ordenado respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 sobre la pensión de invalidez, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, está limitado al 31 de diciembre de 2004, toda vez que a partir del 1.º de enero de 2005 se implementó nuevamente la aplicación del principio de oscilación a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004; El reajuste ordenado incide directamente en la base de la respectiva prestación

pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación. A partir del 1º de enero de 2005 el reajuste de las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública, que había cesado en la prestación de sus servicios, debe efectuarse conforme al principio de oscilación previsto en el artículo 42 del Decreto 4422 de 2004, sin embargo, no se debe perder de vista que el reajuste desde el año 1997 al año 2004 debe reflejar el aumento que debió tener la pensión de invalidez a partir del año 2005. En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la pensión de invalidez de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, esto es el 1 de enero de 2005 deben tener en cuenta el incremento de la variación porcentual del índice de precios al consumidor de los años 1997 a 2004>>.

En consecuencia, resulta evidente que este reajuste opera desde la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 hasta la expedición del Decreto 4433 de 2004, por cuanto este estatuto prohibió dentro del régimen especial consagrado a favor de la Fuerza Pública, acogerse a normas que regulen ajustes para la Administración Pública, a menos que así lo regule expresamente la ley.

7. Solución al caso

7.1. Para resolver, es pertinente indicar que el Consejo de Estado ha dictado unos lineamientos a manera de requisitos necesarios para la aprobación de los acuerdos conciliatorios, que en recientes pronunciamientos este Despacho ha reiterado¹, los cuales son los siguientes:

- 7.1.1. Verificar la caducidad del medio de control, según lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 61 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 81 de la Ley 446 de 1998;
- 7.1.2. Que las partes estén debidamente representadas y con la facultad expresa para conciliar;
- 7.1.3. La naturaleza económica de las pretensiones, según lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 23 1991, modificado por el artículo 70 de la ley 446 de 1998;
- 7.1.4. Que el acuerdo cuente con el soporte probatorio necesario, para acreditar la existencia de la obligación a cargo de la entidad, según los términos del art. 65 A de la Ley 23 de 1991, adicionado por el art. 73 de la ley 446 de 1998²;

¹ Providencia del 22 de agosto de 2017, Rad. 110013335009201700244-00, auto del 18 de septiembre de 2017; Rad. 110013335009201700171-00.

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 28 de noviembre de 2011, rad. 15001-23-31-000-2011-00128-01.

7.1.5. El despacho agrega que se debe verificar si el acuerdo es lesivo para el erario³.

8. De la caducidad

En consideración a que lo pretendido por el convocante es el reajuste de su asignación de retiro con base en el IPC para el año 1997, esta prestación ostenta el carácter de periódica y, por tanto, el ejercicio del medio de control que procede en contra del acto administrativo que niega este reconocimiento no está sujeto al término de caducidad, puesto que conforme al numeral 1.º literal c), del artículo 164 del CPACA la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que reconocen o niegan prestaciones periódicas, puede interponerse en cualquier tiempo, independientemente de la prescripción de las mesadas no reclamadas en tiempo, aspecto sobre el cual se referirá el Despacho más adelante.

9. Naturaleza económica de las pretensiones

9.1. En el *sub lite*, se advierte que la apoderada de la entidad convocada aportó propuesta de conciliación y el apoderado de la parte convocante manifestó estar de acuerdo con dicha oferta, relacionada con el reajuste de la asignación de retiro en favor del señor Constain Morales Bueno, con fundamento en el IPC para el año 1997 e indexación.

9.2. Al respecto, el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, estipula:

<<Artículo 59.- Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, (...)>>.

9.3. Ahora bien, aunque en principio los derechos salariales y prestacionales no son conciliables en razón a su irrenunciabilidad, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política, la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de los acuerdos conciliatorios, siempre y cuando a través de ellos se procure el mejoramiento del derecho y no su menoscabo.

³ Artículos 25, 26 37 de la Ley 640 de 2001.

9.4. En ese orden de ideas, resulta forzoso concluir que el acuerdo conciliatorio versa sobre derechos susceptibles de ser conciliados entre las partes, tras verificar que el convenio suscrito lejos de menoscabar el derecho de la parte actora, lo mejora. Adicionalmente, el derecho a la indexación, y el pago de los intereses que emergen como consecuencia del reajuste de la asignación de retiro con fundamento en el incremento del IPC, que es finalmente el aspecto sobre el cual la parte actora está cediendo en su derecho, resulta discutible y renunciable, por tanto, puede ser objeto de transacción, pues el reajuste de la prestación como tal sí se reconoce de forma completa.

10. Representación de las partes y capacidad para conciliar

10.1. Se encuentra acreditado que el señor Constain Morales Bueno actúa a través de apoderado dentro del presente medio de control y en el escrito de poder visto a folio 1 se le facultó expresamente para conciliar.

10.2. Así mismo, se extrae que CASUR constituyó apoderada (fls. 27 - 32) con facultad para conciliar, quien previa anuencia del Comité de Conciliación propuso una fórmula de arreglo, que fue aceptada de forma libre y espontánea, por la parte convocante.

10.3. En ese sentido, es evidente la voluntad de las partes de acogerse a la propuesta plasmada en la certificación expedida por el Comité de Conciliación de la entidad convocada.

11. Respaldo probatorio del acuerdo

11.1. Reposa en el expediente copia de la Resolución 5512 del 21 de septiembre de 1982, por medio de la cual reconoció asignación mensual de retiro en favor del señor Constain Morales Bueno (fl. 7).

11.2. De la misma manera se acreditó la presentación del escrito de petición radicado el 20 de marzo de 2019, por medio del cual el convocante solicitó a la entidad convocada el reajuste de su prestación de conformidad con el IPC certificado por el DANE y la indexación (fls. 3 - 4).

11.3. Ahora bien, teniendo en cuenta que el IPC es un hecho notorio, el Despacho presenta un cuadro comparativo donde se evidencia la diferencia del incremento de la asignación de retiro realmente efectuado conforme al principio de oscilación, y el reclamado por el convocante, en aplicación del IPC, certificado por el DANE para el grado de Agente, así:

DIFERENCIA ENTRE SALARIOS FIJADOS POR OSCILACION E IPC			
AÑO	VARIACION	IPC año ant	DIFERENCIA
1997	18,86%	21,63%	2,77%

11.4. Lo anterior permite concluir que el incremento de la asignación de retiro en favor del convocante, realizado con base en el principio de oscilación para el año 1997, fue inferior al IPC, siendo procedente reajuste respecto del mentado año, y su correspondiente incidencia en las anualidades posteriores.

11.5. Entonces, es evidente que el reajuste realmente procede a partir del 1 de enero de 1997. Ahora bien, la entidad convocada en la propuesta conciliatoria señala que reajusta la asignación de retiro desde el 1 de enero de 1997, como en efecto corresponde.

11.6. Entonces, bajo estos parámetros la entidad propone el pago del 100% del capital por la suma de un millón cuatrocientos ochenta mil ciento treinta y un pesos m/cte (\$1.480.131.00); el 75% de la indexación por valor de ochenta y nueve mil ochocientos noventa y siete pesos m/cte (\$89.897); y las deducciones de CASUR y Sanidad (-\$60.196 y -\$55.309) para un total de un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintitrés pesos m/cte (\$1.454.523.00). Lo anterior, para pagar al señor Constain Morales Bueno a partir del 20 de marzo de 2015 por prescripción cuatrienal.

11.7. Este reajuste implica que la mesada pensional del convocante tenga un incremento de veintisiete mil ciento noventa pesos m/cte (\$27.190.00).

12. Sobre la lesividad del acuerdo

12.1. Para efectos de verificar que el acuerdo conciliatorio objeto de estudio no resulta lesivo al patrimonio público, es menester examinar que la entidad no haya concertado el pago de obligaciones extinguidas por la prescripción cuatrienal prevista en el artículo 155 del Decreto 1213 de 1990, para las mesadas porque el derecho al reajuste es imprescriptible, es prestación periódica.

12.2. El convocante elevó petición de reajuste ante la entidad demandada el 20 de marzo de 2019, deprecando el reajuste de su prestación, razón por la cual, la entidad no se encuentra obligada al pago de las diferencias que resulten como consecuencia del reajuste, sobre de las mesadas anteriores al 20 de marzo de 2015, habida consideración a que frente a ellas operó el fenómeno de la prescripción cuatrienal, tal y como lo señaló la misma

entidad en la liquidación que soporta la propuesta conciliatoria debidamente aceptada por el apoderado del convocante.

13. Conclusión

13.1. De las consideraciones expuestas, se concluye que el acuerdo conciliatorio analizado, se fundó en un objeto y causa lícita, sin vicios en el consentimiento de las partes conciliatorias, y sin que con él se desconozcan los derechos irrenunciables del convocante, se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico de la entidad.

13.2. En consecuencia, el Despacho aprobará la propuesta de conciliación entre el apoderado del señor Constain Morales Bueno con facultad expresa para conciliar y la apoderada de CASUR.

Bajo las anteriores consideraciones, el **Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá**,

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR el acuerdo conciliatorio contenido en el acta del 07 de junio de 2019 (fls. 42 - 43), consistente en los valores que se indican a continuación:

VALOR DE CAPITAL INDEXADO	\$1.599.993.00
VALOR CAPITAL 100%	\$1.480.131.00
VALOR INDEXACIÓN	\$119.862.00
VALOR INDEXACIÓN POR EL (75%)	\$89.897.00
VALOR CAPITAL MÁS (75%) DE LA INDEXACIÓN	\$1.570.028.00
MENOS DESCUENTO CASUR	-\$60.196.00
MENOS DESCUENTO SANIDAD	-\$55.309.00
VALOR A PAGAR	\$1.454.523.00


El valor a reajustar será de \$27.190.

SEGUNDO: Esta providencia presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada material.

TERCERO: Por Secretaría, **EXPÍDASE** a las partes copia del acta de conciliación y de la presente providencia, conforme a lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso.

CUARTO: En firme este auto, por Secretaría, **ARCHÍVESE** el expediente dejando las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

SCVE

**JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ DC, SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **TRES (03) DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

SARA CRISTINA VILLOTA ESCANDÓN
Secretaría

1

1

1